

PROPOSICIÓN SUPRESIVA

Proyecto de Ley No. 102/2025 Cámara, 083/2025 Senado “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2026”

Suprimase el artículo 85o. del proyecto de Ley No. 102/2025 Cámara, 083/2025 Senado “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2026”, el cual quedará así:

~~ARTÍCULO 85o. CRUCE DE CUENTAS. Autorícese al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para efectuar, en nombre de la Nación, el cruce de cuentas como deudor directo, indirecto o garante subsidiario sobre obligaciones que recíprocamente se tengan con entidades públicas, sin que se requiera operación presupuestal alguna.~~

JUSTIFICACIÓN

El artículo 85, al facultar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para efectuar cruces de cuentas en nombre de la Nación, sin que medie operación presupuestal alguna, plantea serias preocupaciones frente al marco normativo vigente. La ejecución de recursos sin registro en el Presupuesto General de la Nación desconoce principios fundamentales del Estatuto Orgánico del Presupuesto, como la universalidad, la unidad de caja y la anualidad, que garantizan que todas las obligaciones y pagos del Estado se tramiten de manera transparente dentro del presupuesto aprobado por el Congreso.

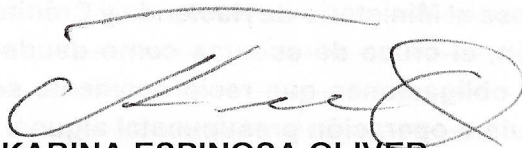
La ausencia de operación presupuestal genera un vacío en la trazabilidad y en la rendición de cuentas, debilitando los mecanismos de control fiscal que ejerce la Contraloría General de la República, así como el control político que corresponde al Congreso. Al no quedar reflejadas estas operaciones en el presupuesto, se crea un riesgo de opacidad respecto al verdadero nivel de endeudamiento y compromisos financieros de la Nación, lo cual puede afectar la sostenibilidad fiscal y la confianza en las cuentas públicas.

Debe señalarse además que la figura resulta redundante e innecesaria. El ordenamiento jurídico ya establece mecanismos claros para la compensación y traslado de obligaciones a través del Estatuto Orgánico del Presupuesto y de la Ley 819 de 2003, que obliga a que todo acto con impacto fiscal sea evaluado y registrado presupuestalmente. Por lo tanto, no es conveniente mantener una norma que contradiga estas disposiciones y permita atajos administrativos al margen de la legalidad presupuestal.

La disposición también podría afectar la autonomía administrativa y financiera de entidades descentralizadas y territoriales, al facultar al Ministerio de Hacienda para decidir de manera unilateral sobre obligaciones recíprocas. Esta situación entra en tensión con los artículos 287 y 356 de la Constitución Política, que garantizan a las entidades territoriales el manejo de sus recursos y competencias propias.

En consecuencia, la eliminación del artículo 85 se justifica plenamente como una medida para preservar la coherencia con el Estatuto Orgánico del Presupuesto, reforzar la transparencia, la disciplina fiscal y el control sobre las finanzas públicas, evitando que se realicen operaciones financieras sin el debido soporte legal y presupuestal.

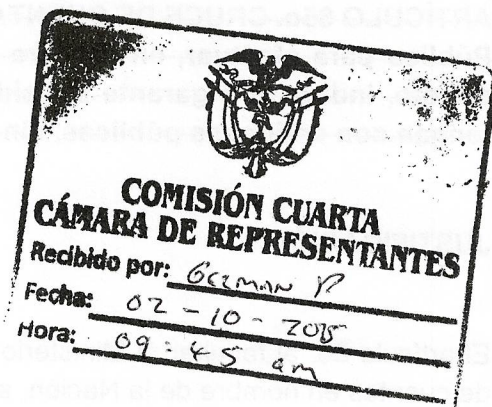
Atentamente,



KARINA ESPINOSA OLIVER

Senadora de la República

Coordinadora Comisión III Senado



PROPOSICIÓN SUPRESIVA

Proyecto de Ley No. 102/2025 Cámara, 083/2025 Senado “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2026”

Suprimase el artículo 83o. del proyecto de Ley No. 102/2025 Cámara, 083/2025 Senado “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2026”, el cual quedará así:

~~ARTÍCULO 83o. En caso de que el Fondo Minero inicie su operación en la vigencia 2025, se faculta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que efectúe los ajustes presupuestales a que haya lugar.~~

JUSTIFICACIÓN

El artículo 83 autoriza al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a realizar ajustes presupuestales en caso de que el Fondo Minero inicie operaciones en la vigencia 2025. Si bien la intención es prever un marco de flexibilidad frente al inicio de una nueva entidad, la disposición resulta innecesaria y contraria a los principios de legalidad y planeación presupuestal que rigen las finanzas públicas.

De acuerdo con el **Decreto Ley 111 de 1996 – Estatuto Orgánico del Presupuesto**, toda creación de fondos, entidades o programas con impacto fiscal debe ser tramitada a través de los mecanismos ordinarios de incorporación presupuestal, ya sea mediante el Presupuesto General de la Nación aprobado por el Congreso o, de manera excepcional, a través de créditos adicionales y traslados que también requieren aval legislativo. Autorizar de manera anticipada y general al Ministerio de Hacienda para efectuar ajustes sin precisar montos, fuentes o destinaciones concretas desdibuja el principio de **legalidad del gasto**.

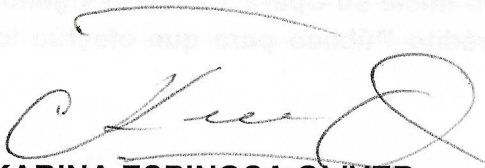
La disposición además afecta el principio de **planeación**, puesto que incorpora la posibilidad de comprometer recursos de manera contingente, sin contar con la debida programación en el Marco Fiscal de Mediano Plazo ni en el Marco de Gasto Sectorial. Este tipo de cláusulas abiertas debilita la consistencia entre los instrumentos de planeación y el presupuesto, generando un riesgo de discrecionalidad en la asignación de recursos.

Debe señalarse también que la normatividad vigente ya ofrece los mecanismos adecuados para la incorporación presupuestal de un nuevo fondo. En caso de que el Fondo Minero inicie operaciones, el Gobierno puede acudir a la figura de adiciones o traslados

presupuestales previstas en los artículos 79 y siguientes del Estatuto Orgánico del Presupuesto, con plena sujeción al control del Congreso y a la disciplina fiscal de la Ley 819 de 2003. Por tanto, el artículo resulta redundante y carece de justificación técnica.

En conclusión, la eliminación del artículo 83 es necesaria por cuanto desconoce el marco constitucional presupuestal, concentra amplio poder en el Ejecutivo, genera inseguridad sobre recursos sensibles. Así las cosas y en aras de mantener la coherencia del ordenamiento presupuestal, evitar disposiciones habilitantes que desplacen el control político y garantizar que cualquier ajuste derivado de la creación del Fondo Minero se realice bajo las reglas establecidas de legalidad, planeación y transparencia, se solicita su supresión.

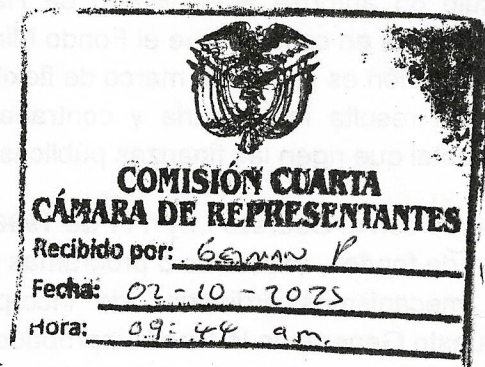
Atentamente,



KARINA ESPINOSA OLIVER

Senadora de la República

Coordinadora Comisión III Senado



PROPOSICIÓN SUPRESIVA

Proyecto de Ley No. 102/2025 Cámara, 083/2025 Senado “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2026”

Suprimase el artículo 82o. del proyecto de Ley No. 102/2025 Cámara, 083/2025 Senado “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2026”, el cual quedará así:

~~**ARTÍCULO 82o. En concordancia con lo establecido en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, las asignaciones de gasto derivadas del cumplimiento de mandatos legales que ordenan gasto y crean destinaciones específicas solo serán incorporadas en el decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2026 en la medida en que exista disponibilidad de recursos y espacio fiscal dentro de los techos del Marco de Gasto de Mediano Plazo 2026-2029, con excepción de las transferencias corrientes de rango constitucional y de las previstas en el Sistema General de Participaciones -SGP, así como de las correspondientes al pago del Sistema de Seguridad Social, los aportes a las Instituciones de Educación Superior Públicas y el cumplimiento de fallos judiciales debidamente ejecutoriados.**~~

JUSTIFICACIÓN

El artículo 82 condiciona la incorporación de asignaciones de gasto derivadas de mandatos legales únicamente a la existencia de disponibilidad de recursos y de espacio fiscal dentro de los techos del Marco de Gasto de Mediano Plazo. Aunque busca armonizar las decisiones presupuestales con la sostenibilidad fiscal, esta disposición resulta problemática frente a los principios de legalidad y obligatoriedad del gasto público previstos en la Constitución y en el Estatuto Orgánico del Presupuesto.

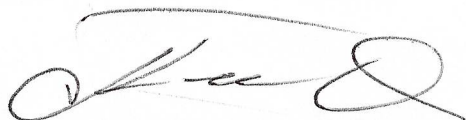
En primer lugar, el artículo desconoce el **principio de legalidad del gasto**, según el cual toda erogación ordenada por una ley de la República debe ser incorporada en el Presupuesto General de la Nación, sin condicionamientos distintos a los establecidos en la propia ley. Subordinar el cumplimiento de mandatos legales a la existencia de espacio fiscal equivale a relativizar la fuerza obligatoria de la ley, lo cual vulnera la jerarquía normativa y la separación de poderes, ya que un instrumento técnico de planeación como el Marco de Gasto de Mediano Plazo no puede limitar el cumplimiento de disposiciones legales de rango superior.

En segundo lugar, la medida afecta la **certeza y obligatoriedad de las asignaciones presupuestales**, pues introduce un criterio de discrecionalidad en la incorporación de recursos. Esto puede derivar en el incumplimiento de obligaciones legales distintas a las excepciones que el propio artículo reconoce, generando riesgos de demandas judiciales contra el Estado y aumentando la litigiosidad por omisión en la apropiación de recursos.

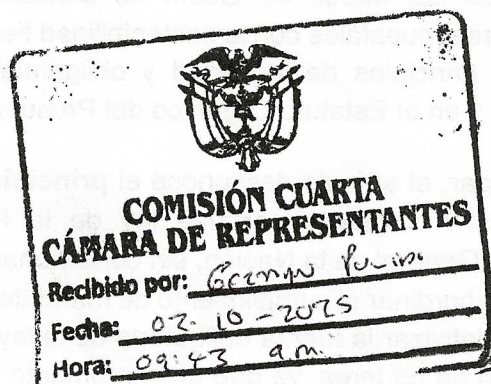
Debe resaltarse que el **Estatuto Orgánico del Presupuesto** ya contempla mecanismos para garantizar la sostenibilidad fiscal y el equilibrio entre ingresos y gastos, como la exigencia de programación integral, la regla de consistencia entre el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el presupuesto, y las facultades del Gobierno para presentar al Congreso proyectos de adición, reducción o traslado presupuestal. Por tanto, no se requiere de una disposición adicional que condicione la obligatoriedad de la ley al espacio fiscal, lo que, además de redundante, puede ser contrario a los principios constitucionales de planeación y supremacía de la ley.

En consecuencia, la eliminación del artículo 82 asegura que las asignaciones derivadas de mandatos legales con fuerza de ley mantengan su carácter vinculante, se incorporen con pleno respeto de los principios presupuestales y se tramiten mediante los mecanismos ya previstos en el ordenamiento vigente, sin trasladar a los ciudadanos ni a las entidades públicas la incertidumbre sobre su cumplimiento.

Atentamente,



KARINA ESPINOSA OLIVER
Senadora de la República
Coordinadora Comisión III Senado



PROPOSICIÓN SUPRESIVA

Proyecto de Ley No. 102/2025 Cámara, 083/2025 Senado “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2026”

Suprimase el artículo 80o. del proyecto de Ley No. 102/2025 Cámara, 083/2025 Senado “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2026”, el cual quedará así:

ARTÍCULO 80o. Los certificados de libertad y tradición, por no corresponder a derechos de registro de instrumentos públicos, serán excluidos para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 13 y 13A de la Ley 55 de 1985.

JUSTIFICACIÓN

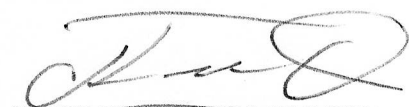
Las disposiciones de la Ley 55 de 1985, arts. 13 y 13ª, se concentran en que ciertos actos notariales y registrales generan un recaudo económico que debe destinarse al financiamiento de la Sistema Judicial.

Lo que propone este artículo al excluir los certificados de libertad y tradición de la obligación de transferir recursos por este concepto, **llevaría al Sistema Judicial a perder una fuente de financiación**, pues ya no recibiría lo recaudado por la expedición de certificados de libertad y tradición. Mismos que se han usado para infraestructura, salarios, operación y otros.

Así las cosas, con el argumento del gobierno sobre que “estos no corresponden a “derechos de registro” propiamente dichos, sino a servicios administrativos de la SNR., **pondrían en juego parte del esquema de sostenibilidad de la justicia en Colombia**, con la disminución del presupuesto autónomo y un déficit en el funcionamiento.

La oposición a tal disposición es simple y sentida, primero, La Rama Judicial no debería depender de traslados discrecionales del Ejecutivo, sino contar con recursos propios y suficientes, segundo, entraríamos a aprobar un precedente que abre la puerta a que otras fuentes de recursos judiciales se recorten o se redirijan y tercero la desnaturalización de las destinaciones originales que por Ley se ha establecido, para este caso, la intención de la Ley 55 de 1985 es fortalecer la justicia, no engrosar el presupuesto de la SNR.

Atentamente,



KARINA ESPINOSA OLIVER

Senadora de la República

Coordinadora Comisión III Senado

